

Empresa y riqueza social

En un contexto tan complejo e incierto como el que nos toca vivir, el papel de las empresas, su función como portadores de cohesión social y de sostenibilidad deviene clave para evolucionar desde nuestro actual Estado del bienestar hacia un Estado relacional donde gobiernos, empresas y sociedad civil colaboremos en la creación de una sociedad más cohesionada, integrada y sostenible.

Los gestores y los propietarios de las empresas deben tener en cuenta intereses colectivos o sociales propios del entorno en el que desarrollan su actividad. Lejos queda ya la opinión del nobel de economía, Milton Friedman, quien en 1970 defendía la tesis de que la única responsabilidad admisible en la dirección empresarial debía venir presidida por el incremento de los beneficios de la empresa y la maximización del valor de la participación de sus socios.

Hoy día, la exigencia de tomar en cuenta otros intereses supraindividuales deriva del entendimiento, de la comprensión de la empresa como una conexión de intereses convergentes. Se trata de implicar también a las empresas en el marco de las políticas públicas que persiguen el logro de objetivos generalmente admitidos, impregnados de un fuerte componente ético. No se concibe una gestión empresarial que no contemple adecuadamente valores de aceptación general; ya ha quedado comprobado que, al menos en el caso de las grandes corporaciones, una actuación desviada de tales valores puede llegar a lesionar directamente estos intereses generales.

El logro y defensa de fines como el de la protección de los derechos humanos, la crisis climática o el de la propia supervivencia o conservación de la empresa y sus empleos a largo plazo deben ser tomados en consideración imperativamente dentro del marco de los deberes de los administradores sociales, cuya gestión sólo se va a considerar legítima si atiende a compromisos éticos, políticos y sociales.

La sostenibilidad por parte de las empresas ha dejado de ser sinónimo de meras acciones filantrópicas y se ha convertido en una herramienta de gestión que forma parte de las decisiones de cualquier empresa u organización. Está calando la visión de que es necesario superar la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo que ha imperado en amplios sectores de la actividad empresarial, y orientar los esfuerzos hacia la búsqueda de una sostenibilidad a futuro que entendemos bajo el acrónimo ASG (riesgos ambientales, sociales y de gobernanza) en el desarrollo de sus modelos de negocio.

Hemos cruzado un umbral en cuanto a la gravedad y la urgencia de los retos ambientales, sociales y de gobernanza a los que deben dar respuesta todos los países y regiones del planeta. Las Naciones Unidas han declarado que estamos en la “década de la acción” para alcanzar los ambiciosos objetivos del desarrollo sostenible, y la estamos viviendo inmersos primero en una crisis

sanitaria global y además de ellos enfrentándonos a evidencias crecientes de la devastación resultante del cambio climático, todo ello en un clima social tensionado por una creciente desigualdad y de incertezas derivadas del caos geopolítico. En efecto, solo nos faltaba la guerra, los conflictos bélicos, y desgraciadamente también se han sumado a toda la complejidad de un contexto geopolítico tan inédito como incierto.

Los retos son de tal envergadura que difícilmente se podrán afrontar sin la implicación de la mayor parte de las instituciones y personas de las economías desarrolladas del planeta. No es sorprendente, por tanto, que las estrategias de recuperación que actualmente se están desplegando en la mayoría de los países y las regiones de los países desarrollados prioricen el objetivo de la transición hacia un tejido socioeconómico resiliente, para intentar sobreponerse a crisis de carácter sistémico y garantizando la capacidad de generar bienestar para la ciudadanía de un manera justa y sostenible.

En nuestro entorno inmediato vivimos la realidad socio empresarial MONDRAGON de gran relevancia. El Informe de Competitividad del País Vasco (Orkestra 2024) identifica la comarca de Debagoiena que cuenta con el 41.7% de empleo cooperativo, como líder en renta media anual (22.710€) y tiene el menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza (11.8%) de todo el País Vasco. Es la concreción de la propuesta de Arizmendiarieta: “La empresa es la primera célula económico-social de una sociedad de personas en una comunidad, cuyo soporte es la solidaridad”

La interconexión existente entre economía, sociedad y entorno natural permite valorar en qué medida la generación de riqueza social por parte de las empresas ha de quedar vinculada, conectada a la realización de un esfuerzo más amplio en materia ambiental, social y de gobernanza, como muestra de la mejor forma de protegernos contra el impacto de los riesgos no financieros.

El debate social instalado en torno a qué medidas cabe adoptar para garantizar la supervivencia de nuestras empresas ante un contexto económico tan complejo se ha centrado en la dimensión salarial; es comprensible, sin duda, que se cuestione una reducción de salarios como cauce para mantener su competitividad y que se reivindique, de forma recíproca, que éstos aumenten cuando lleguen momentos de bonanza empresarial; pero junto a este debate deben abrirse otros ámbitos de reflexión.

Reforzar la confianza en el enfoque vasco del derecho de propiedad, de las relaciones sociales, de las relaciones industriales, en la manera de garantizar un sentido comunitario de la vida y unos conceptos de valores resulta determinante, clave para nuestra particular brújula social, porque con estos mimbres, siendo fieles a las lecciones del pasado pero actualizándolas, modernizándolas, adaptándolas a la compleja y cambiante realidad actual seremos capaces de encontrar el faro que guíe nuestros siguientes pasos hacia la estrategia que defina nuestro lugar y nuestro papel en este mundo globalizado tan complejo y que tantas incertidumbres plantea.

No podemos pretender convertirnos en los fenicios del siglo XXI, que hoy día vienen representados por los países del sudeste asiático (China, India) ni en exponentes de un capitalismo voraz e insolidario como el que representa EEUU. Desde nuestra dinámica empresarial y social no tiene sentido pretender operar o funcionar con una estricta dinámica de abaratar costes, porque el sacrificio de derechos sociales en el altar de la competitividad anclada en el precio de los productos no nos ha hecho ni nos hará mejores o más sostenibles.

¿Qué modelo cabría reivindicar y profundizar? El de la superación de la dimensión empresarial como una mera suma de capital y trabajo, en la concepción de empresa como un conjunto de personas unidas por un proyecto, una nueva cultura de empresa basada en la confianza recíproca. **Ya lo decía Arizmendiarieta "El dialogo y la cooperación, la libertad y el compromiso, constituyen métodos eficaces en la conjunción de voluntades y esfuerzos para organizar y administrar el trabajo humano, para humanizar la economía"**

Debe emerger y consolidarse el concepto de *competitividad sostenible*, concretado en la definición de una serie de parámetros de conducta y de actuación empresarial tales como la equidad salarial, el mantenimiento del empleo, la política de localización de los centros de actividad empresarial o la sostenibilidad medioambiental, además de otras dimensiones como la tecnológica y su proyección social.

Hay que pasar del "decir" al "hacer". Los hechos son las nuevas palabras, no basta con pedir colaboración, hay que colaborar; no basta con exigir compromiso, hay que comprometerse; no basta con quejarse de la falta de implicación, quien dirige la empresa ha de ser el primero en implicarse.

En la trinchera de la confrontación se vive mejor y más cómodo que en el de la cooperación. Hay que generar un clima que favorezca la asunción compartida de los malos y los buenos momentos empresariales por parte de todos, fomentar una verdadera política de empleo y lograr la implicación responsable de los trabajadores en el futuro de nuestras empresas.

El modelo de gestión empresarial de las cooperativas de MONDRAGON es una realidad con más de 70.000 trabajadores de los cuales 30.660 están en Euskadi otros 29.340 viven en el resto de España. Es un claro exponente de una solidaridad permanente generando puestos de trabajo estable.

También destacamos que tienen sus raíces y proyectan su futuro en Euskadi, tanto por cultura como por los valores que sustentan su estrategia y gestión.

Necesitamos que los centros de decisión de las empresas se mantengan en Euskadi. No podemos permitirnos el lujo de desmotivar la continuidad de nuestro tejido industrial. Tenemos que ser capaces ahora de generar un clima social que consolide nuestra industria, nuestro ecosistema empresarial, porque es la base para salir de la crisis, para generar empleo y para aportar recursos al sistema y garantizar así las prestaciones sociales que demanda esta crisis.

El reto compartido ha de ser lograr empresas más estables, duraderas y con mayor sentimiento de pertenencia. Nuestras empresas y su actividad suponen el verdadero elemento tractor de nuestra sociedad y porque generan riqueza social. Nuestra economía debe mantener el pulso y el músculo industrial para mantener unos servicios públicos que, siempre mejorables, son y serán, sin duda, la base de nuestro sistema de bienestar social. No olvidemos que para distribuir la riqueza primero hay que crearla.

Juan José Álvarez. Catedrático Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco y socio de ALE - Arizmendiarrietaren Lagunak Elkarte.